



Consejo de Seguridad

Distr. general
20 de marzo de 2002
Español
Original: inglés

Carta de fecha 20 de marzo de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

El Comité contra el Terrorismo ha recibido la adición adjunta al informe presentado por Portugal en cumplimiento del párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo).

Le agradecería que hiciera distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Jeremy **Greenstock**
Presidente
Comité contra el Terrorismo



Anexo

Nota verbal de fecha 18 de marzo de 2002 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001), relativa a la lucha contra el terrorismo, por la Misión Permanente de Portugal ante las Naciones Unidas

La Misión Permanente de Portugal ante las Naciones Unidas saluda atentamente al Presidente del Comité contra el Terrorismo y, en relación con su nota de 18 de enero de 2002, tiene el honor de transmitir un informe complementario detallado sobre las medidas adoptadas por Portugal en cumplimiento de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, presentado con arreglo al formato sugerido por el Comité contra el Terrorismo (véase el apéndice).

Apéndice

Informe presentado por Portugal al Comité contra el Terrorismo en cumplimiento del párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad

Párrafo 1 Apartado b)

[El Consejo de Seguridad decide que todos los Estados ...]

Tipifiquen como delito la provisión o la recaudación intencionales, por cualesquiera medios, directa o indirectamente, de fondos por sus nacionales o en su territorio con la intención de que dichos fondos se utilicen, o con conocimiento de que dichos fondos se utilizarán, para perpetrar actos de terrorismo.

¿Qué actividades enumeradas en este apartado están tipificadas como delitos en su país y a qué pena se condena la comisión de esos delitos?

Desde marzo de 1995, el Código Penal portugués prevé específicamente el delito de terrorismo en dos de sus disposiciones: el artículo 300 (titulado “Organizaciones terroristas”) y el artículo 301 (titulado “Terrorismo”).

En el artículo 300 del Código Penal se prevén penas para “*todo aquel que promueva o establezca un grupo, una organización o asociación terrorista, se adhiera a ella o la apoye ...*”.

Esta disposición tipifica como delito, entre otras cosas, la **financiación de grupos u organizaciones terroristas**.

Esos delitos se castigan con penas de 5 a 15 años de prisión, que pueden ser de 10 a 15 años en el caso de los jefes de dichos grupos, organizaciones o asociaciones.

La pena también aumentará en un tercio en sus límites mínimo y máximo cuando los autores del delito tengan en su poder armas especialmente peligrosas, como armas de fuego, explosivos o energía nuclear.

La mera realización de *actos preparatorios* para el establecimiento de grupos terroristas, por los cuales se entienden también los *actos preparatorios de financiación*, se castigará con penas de uno a ocho años de prisión.

Cabe señalar, sin embargo, que pueden reducirse las penas previstas por la ley, especialmente cuando el detenido trate seriamente de impedir, o logre impedir, el establecimiento de dichos grupos, o informe a las autoridades de su existencia, a fin de impedir que se cometa un delito.

El artículo 305 del Código Penal también dispone que la simple **amenaza** de cometer un delito, cuando ésta cause alarma o inquietud entre la población, se castigará con penas de hasta dos años de prisión o multa de hasta 240 días. Actualmente se debate en el parlamento portugués una enmienda a ese artículo, con miras a aumentar la pena máxima a tres años de prisión.

Con respecto al **blanqueo de dinero**, el 15 de septiembre de 1993 se promulgó el Decreto Ley 313/93, que traspone al ordenamiento jurídico nacional la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio, relativa a la *prevención* de la utilización

del sistema financiero con fines de blanqueo de dinero, especialmente dinero derivado del tráfico de drogas.

Posteriormente, en virtud del Decreto Ley 325/95, publicado el 2 de diciembre, **se amplió el marco penal relativo al blanqueo de dinero a otros delitos**, además del delito de tráfico de drogas.

El Decreto Ley 325/95 establece *medidas preventivas y represivas* contra el blanqueo de dinero y actualmente también contra el blanqueo de otros bienes derivados de los delitos que en él se enumeran, en concreto y expresamente el delito de terrorismo (artículo 2).

A raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, se publicaron dos documentos legislativos: la Ley 5/2002, de 11 de enero de 2002, y la Ley 10/2002, de 11 de febrero de 2002. Esta legislación mejora las disposiciones legales existentes de *prevención y represión* del blanqueo de dinero derivado de actividades delictivas, **incluido el terrorismo**.

En los tres documentos mencionados (Decreto Ley 325/95, Ley 5/2002 y Ley 10/2002) se combate el blanqueo de dinero y el blanqueo de otras ganancias derivadas de actividades delictivas, por una parte *tipificando específicamente como delito* determinados tipos de conducta y, por otra parte, mediante medidas preventivas para detectar en el sistema financiero otras actividades u ocupaciones por las que circulan los bienes o beneficios derivados de la actividad delictiva.

Entre las medidas adoptadas para *impedir el blanqueo de dinero* y aumentar la eficacia de la investigación criminal y la posterior represión de esos delitos, cabe mencionar las siguientes:

- La obligación de comprobar la identidad de clientes que cumplen ciertos requisitos y de conservar los documentos de identificación pertinentes por un período de 10 años;
- La obligación, en ciertos casos, de aportar documentos y la identificación de otros participantes en operaciones financieras sospechosas;
- La suspensión de operaciones en caso de presunto blanqueo de dinero;
- La obligación de las entidades crediticias de ejercer control sobre ciertas cuentas bancarias sospechosas e informar de sus movimientos, con la posibilidad de que se les ordene congelar dichas cuentas;
- La dispensa o exención del deber de guardar el secreto profesional en casos tipificados y a efectos de una investigación criminal, si así lo autoriza previamente la autoridad judicial competente;
- La obligación de ciertos profesionales, entre ellos los notarios y los empleados de la banca, así como otras entidades que intervienen en transacciones de bienes raíces, de informar a las autoridades acerca de actividades sospechosas.

Entre las *medidas represivas*, cabe subrayar que todos aquellos que conviertan, transfieran o disimulen bienes o beneficios derivados de la comisión de delitos, **incluido el delito de terrorismo**, faciliten su obtención o colaboren en ella, incurren en responsabilidad penal y están sujetos a penas entre 1 y 12 años de prisión.

Las ganancias de esos delitos, concretamente del delito de blanqueo de dinero, revertirán al Estado.

Cabe destacar también que las entidades crediticias y sociedades financieras que proporcionen información falsa, se nieguen a suministrar documentos u obstaculicen su recopilación, incurrirán también en responsabilidad penal y serán castigadas con penas de seis meses a tres años de prisión; esto es aplicable no sólo a los representantes de dichas entidades, sino también a aquellos empleados que participen en tales actos.

Esos delitos son punibles en Portugal, incluso cuando los hechos que constituyen la acción principal ocurran fuera del territorio nacional (artículo 2 del Decreto Ley 325/95, enmendado por la Ley 10/2002).

Además de prever la adopción de medidas penales, los tres instrumentos legislativos mencionados establecen también un régimen de *sanciones administrativas* cuando se infrinja alguna de sus propias disposiciones (artículos 1 a 13 del Decreto Ley 325/95 y artículo 14 de la Ley 5/2002), en cuyo caso la responsabilidad del pago de las multas recaerá sobre las entidades financieras y de otra índole y sobre personas particulares que desempeñen alguna función en dichas entidades.

El importe de esas multas oscila entre 750 y 750.000 euros y puede duplicarse en caso de reincidencia o reducirse a la mitad en caso de mera negligencia.

Apartado c)

[El Consejo de Seguridad decide que todos los Estados ...]

Congelen sin dilación los fondos y otros activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión; de las entidades de propiedad o bajo el control, directo o indirecto, de esas personas, y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, incluidos los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control directo o indirecto de esas personas y de otras personas y entidades asociadas con ellos.

¿Qué legislación y qué procedimientos existen para congelar cuentas y activos en bancos e instituciones financieras? Sería útil que los Estados proporcionaran ejemplos de cualquier medida que hubieran adoptado al respecto.

Véase la respuesta al apartado b).

Cabe señalar que desde 1998, en virtud de la Ley 59/98, de 25 de agosto, figura en el Código de Procedimiento Criminal portugués el régimen previsto en el artículo 181, según el cual un juez puede ordenar la *incautación* en bancos y otras entidades crediticias de documentos, títulos, valores y cualquier otro objeto, aunque estén depositados en cajas de seguridad particulares, si tiene razones fundadas para creer que *se derivan de una actividad delictiva* y son de interés para llegar a la verdad u obtener pruebas, incluso en el caso de que no pertenezcan al acusado ni estén registrados en su nombre.

Por lo tanto, mucho antes de los acontecimientos de septiembre de 2001, era posible en Portugal congelar activos derivados de actividades delictivas.

En virtud de los instrumentos jurídicos mencionados en el párrafo anterior se establecieron, elaboraron y mejoraron medidas para combatir la delincuencia organizada y la delincuencia económica y financiera, **incluidos el terrorismo y el blanqueo de dinero** (Decreto Ley 325/95). En el artículo 4 de la Ley 5/2002, titulada

“Control de las cuentas bancarias” se prevé expresamente la posibilidad de *congelar cuentas bancarias*, de conformidad con una orden o autorización judicial, cuando sea necesario, a fin de *impedir* que se cometa el delito de blanqueo de dinero.

En este contexto, y con carácter excepcional, la ley *exime* a las entidades financieras (y a sus órganos, directores, empleados y representantes) *del deber de guardar el secreto profesional*, permitiéndoles informar a las autoridades competentes de operaciones financieras sospechosas y proporcionar a dichas autoridades los documentos, depósitos o activos pertinentes.

Recientemente se publicó en el *Boletín Oficial del Estado* la Ley 11/2002, de 16 de febrero, en virtud de la cual se establece un régimen que prevé *penas por violación de las sanciones financieras impuestas en el seno de las Naciones Unidas y la Unión Europea*. Con arreglo a lo dispuesto en dicho régimen, las penas oscilan entre tres y cinco años de prisión.

Paralelamente, en su calidad de miembro de la Unión Europea, Portugal aplica de forma inmediata y directa los *reglamentos comunitarios* en la materia.

En este sentido, cabe destacar el Reglamento del Consejo (CE) 467/2001, de 6 de marzo de 2001, relativo a la **congelación de fondos y otros recursos financieros** de propiedad de cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo designado por el Comité de Sanciones contra los Talibanes y que figure en la lista del anexo a dicho Reglamento.

Esa lista de personas y entidades ha sido actualizada continuamente por reglamentos posteriores, a saber:

- Reglamento del Consejo (CE) 1354/2001, de 4 de julio de 2001;
- Reglamento del Consejo (CE) 1996/2001, de 11 de octubre de 2001;
- Reglamento del Consejo (CE) 2062/2001, de 19 de octubre de 2001;
- Reglamento del Consejo (CE) 2199/2001, de 12 de noviembre de 2001;
- Reglamento del Consejo (CE) 2373/2001, de 4 de diciembre de 2001;
- Reglamento del Consejo (CE) 2580/2001, de 27 de diciembre de 2001.

Con arreglo a lo dispuesto en esos reglamentos, las autoridades de enlace para este asunto son la Dirección General de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Dirección General de Asuntos Europeos y Relaciones Internacionales del Ministerio de Finanzas.

Tras los acontecimientos del 11 de septiembre, el Ministerio de Finanzas del Gobierno portugués expidió una orden ejecutiva¹ por la cual se congelaban todos los recursos financieros de propiedad de las personas y entidades mencionadas en las listas que figuraban como anexos al Reglamento 467/2001 y sus respectivas enmiendas.

En cumplimiento de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, la orden también disponía que los sistemas bancarios divulgaran las listas de personas y entidades presuntamente vinculadas a los ataques terroristas del 11 de septiembre,

¹ Orden 21 175/2001 (segunda serie), publicada en el *Boletín Oficial del Estado*, serie II, de 11 de octubre de 2001.

con miras a obtener información pertinente a la investigación y transmitirla a las autoridades competentes.

Además, Portugal aplica todos los procedimientos recomendados por el Grupo Especial de Expertos Financieros sobre blanqueo de capitales del cual es miembro, para evitar que su sistema financiero sea utilizado para financiar el terrorismo.

Apartado d)

[El Consejo de Seguridad decide que todos los Estados ...]

Prohíban a sus nacionales o a toda persona y entidad que se encuentre en su territorio que pongan cualesquiera fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos de otra índole, directa o indirectamente, a disposición de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo o faciliten su comisión o participen en ella, de las entidades de propiedad o bajo el control directo o indirecto de esas personas y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas o bajo sus órdenes.

¿Qué medidas existen para prohibir las actividades enumeradas en este apartado?

Véanse las respuestas a los apartados b) y c) del párrafo 1.

Se encuentra actualmente en vías de transposición al sistema jurídico portugués la Directiva 2001/97/CEE del Consejo y el Parlamento Europeo, de 4 de diciembre de 2001, por la que se enmienda la Directiva Comunitaria 91/308/CEE (transpuesta a su vez en virtud del Decreto Ley 313/93, de 15 de septiembre).

Apartado a)

[El Consejo de Seguridad decide que todos los Estados ...]

Previengan y repriman la financiación de todo acto de terrorismo

¿Qué medidas se han adoptado, de haberse adoptado alguna, para prevenir y reprimir la financiación de actos terroristas, además de las enumeradas en sus respuestas a las preguntas relativas a los apartados b) a d) del párrafo 1?

Además de las medidas mencionadas en las respuestas a los apartados b) a d) del párrafo 1, debemos subrayar el desarrollo de la investigación criminal en la materia y la mayor *cooperación con las autoridades de otros países y los órganos judiciales internacionales* competentes, **con miras a prevenir y reprimir el terrorismo y su financiación.**

En cuanto a la **investigación criminal**, cabe señalar que el Código de Procedimiento Criminal portugués, en el título III del Libro III, titulado “Acopio de pruebas” establece en algunos casos un **régimen especial**, menos burocrático y a veces incluso excepcional para el delito de terrorismo y actividades conexas.

Naturalmente, esas disposiciones legales, que tienen por objeto prevenir y reprimir el terrorismo en cualquiera de sus formas, repercuten en la **lucha contra la financiación del terrorismo**. Entre ellas cabe citar las siguientes:

El artículo 174 4) del Código de Procedimiento Criminal, que dispone que cuando se trata de delincuencia violenta o altamente organizada, como es el caso de los delitos de terrorismo, y existen motivos fundados para creer que está a punto de

cometerse un delito que pone en grave peligro la vida o la integridad física de una persona, los órganos policiales competentes están facultados para realizar “registros domiciliarios y cacheos”, sin que sea necesaria la autorización previa o la supervisión de un órgano judicial.

En tales casos, *las autoridades judiciales examinan el caso una vez que haya intervenido la policía*, que notifica rápidamente al juez de instrucción de las medidas adoptadas para que éste certifique su validez; de lo contrario dichas medidas serán nulas.

El artículo 177 del Código de Procedimiento Criminal no permitía la realización de registros domiciliarios durante la noche, de conformidad con el principio de inviolabilidad del domicilio consagrado como derecho fundamental en la Constitución portuguesa. Sin embargo, la Quinta Enmienda constitucional (Ley constitucional 1/2001, de 12 de diciembre) introdujo una **excepción** a ese régimen, permitiendo la realización de registros domiciliarios durante la noche en un número muy limitado de delitos, **entre ellos el delito de terrorismo** (artículo 34 de la Constitución).

El artículo 187 del Código de Procedimiento Criminal también establece la “admisibilidad de las intervenciones telefónicas” en el acopio de pruebas. Las intervenciones telefónicas están sujetas a una orden judicial y sólo pueden ser autorizadas en el caso de los delitos enunciados expresamente en ese artículo, entre ellos el **delito de terrorismo y la delincuencia violenta o altamente organizada**.

En el mismo sentido, la Ley 10/2001, de 25 de agosto, relativa al “**régimen de operaciones secretas con fines de prevención de delitos o investigación criminal**”, dispone que sólo se pueden realizar esas operaciones en la investigación y prevención de los delitos indicados en la Ley, entre ellos el delito de **terrorismo y de organización terrorista**.

Para poder recurrir a dichas medidas (intervenciones telefónicas y operaciones secretas) es necesario que éstas sean *adecuadas y proporcionales a los fines de prevención y represión del delito en cada caso particular y a la gravedad del delito investigado*.

Asimismo, se admiten dichas medidas en el marco de la cooperación judicial internacional sobre asuntos penales y, por lo tanto, pueden ser adoptadas en Portugal por autoridades policiales y judiciales extranjeras, cuando así lo autorice el Ministerio de Justicia, siendo aplicable en algunos casos la legislación extranjera, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 104/2001, de 25 de agosto, por la cual se enmendó la Ley 144/99, de 31 de agosto, sobre la cooperación judicial internacional (artículos 160-B y 160-C, 145 y 146).

En conclusión, Portugal presta particular atención a la investigación criminal del **terrorismo**, incluida **su financiación**, y para ello la ley permite utilizar medios excepcionales no admitidos en la investigación de otros delitos.

También es pertinente en este ámbito la Ley 21/2000, de 10 de agosto, que define la “**organización de la investigación criminal**” y dispone:

- Que es competencia reservada de la Policía Judicial la *investigación* de los **delitos de organización terrorista, terrorismo, blanqueo de dinero o blanqueo de otros bienes y servicios, falsificación de documentos ...**;

- Que son **competencia específica** de dicho cuerpo policial los **contactos** de los órganos de la policía criminal portuguesa y otros servicios públicos nacionales con organizaciones internacionales de cooperación en materia de policía criminal, como la Europol y la Interpol.

No se debe olvidar tampoco la Ley de Seguridad Interna de Portugal (Ley 20/87, de 12 de junio) que define la **prevención de la delincuencia violenta o altamente organizada, como el sabotaje, el espionaje y el terrorismo**, como una de las tareas fundamentales del Estado para garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población, así como la democracia (artículo 1).

Las diversas fuerzas y servicios de seguridad trabajan en pro de la seguridad interna del país y, en este sentido, son especialmente pertinentes los siguientes órganos: Policía Judicial, Servicio de Extranjeros y Fronteras y Servicio de Información de Seguridad.

Cabe subrayar también que la Ley Orgánica de la Policía Judicial (Decreto Ley 275-A/2000, de 9 de noviembre, enmendado por la Ley 103/2001, de 25 de agosto), que desarrolla la Ley de Organización de la Investigación Criminal antes mencionada, atribuye a ese cuerpo policial amplias competencias en materia de prevención del delito (artículo 4), investigación criminal (artículo 5), procedimiento (artículo 11-A de la Ley 103/2001) y cooperación internacional (artículos 6 y 7).

La Ley Orgánica del Servicio de Extranjeros y Fronteras (Decreto Ley 252/2000, de 16 de octubre) también atribuye a este servicio amplias competencias y le confía la tarea de controlar la entrada y permanencia en territorio portugués de nacionales portugueses y de otros países, así como su salida del país, sin olvidar la ejecución y aplicación coercitiva de una política migratoria correcta (artículos 1 y 2). Para facilitar el cumplimiento de esas tareas, la ley también establece medidas como la cooperación entre el Estado portugués y otros Estados, así como organismos internacionales de los cuales Portugal es miembro (artículo 4 2)).

Las diversas autoridades policiales adoptan, en el ejercicio de sus funciones, medidas pertinentes en materia de seguridad interna, en el marco de sus leyes orgánicas respectivas. En este sentido, cabe señalar que la Ley 20/87 antes mencionada define como **medida policial especial** la orden de poner fin a la actividad de empresas, grupos, organizaciones o asociaciones que se dediquen a la delincuencia altamente organizada, es decir, el sabotaje, el espionaje o el **terrorismo, o a la preparación, el adiestramiento o reclutamiento de personas para esos fines** (artículo 16 3) d)).

La **Ley de cooperación judicial internacional en asuntos penales**, antes mencionada (Ley 144/99, de 31 de agosto, enmendada por la Ley 104/2001, de 25 de agosto), reviste también una importancia fundamental: prescribe modalidades de cooperación en asuntos penales, entre ellas la extradición, la transferencia de personas sentenciadas, la vigilancia y la asistencia jurídica mutua en asuntos penales (artículo 1).

En cuanto a las relaciones internacionales, las modalidades de cooperación previstas en la Ley 144/99 están reguladas principalmente por los tratados, convenios y acuerdos internacionales vinculantes para el Estado portugués y, con carácter subsidiario, por las disposiciones de dicha ley (artículo 3). En caso de no ser aplicable ningún instrumento internacional y de que la Ley 144/99 se aplique con carácter subsidiario, es necesaria la reciprocidad (artículo 4).

Este es también el régimen previsto en los artículos 229 y 233 del Código de Procedimiento Criminal portugués.

La asistencia en asuntos penales prevista en la Ley 144/99 comprende, entre otras cosas, el acopio de pruebas a los fines de la investigación criminal mediante registros, incautación de bienes, y exámenes y análisis de expertos (artículo 145).

Párrafo 2

Apartado a)

[El Consejo de Seguridad decide que todos los Estados]

Se abstengan de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que participen en la comisión de actos de terrorismo, en particular reprimiendo el reclutamiento de miembros de grupos terroristas y poniendo fin al abastecimiento de armas a los terroristas.

¿Qué legislación u otras medidas existen para dar efecto a este apartado? En particular, ¿en qué figuras delictivas están encuadrados: i) el reclutamiento de miembros de grupos terroristas y ii) el abastecimiento de armas a los terroristas? ¿Qué otras medidas existen para ayudar a evitar esas actividades?

Véanse las respuestas anteriores, especialmente las respuestas a los apartados a) y b) del párrafo 1.

En el párrafo 1 del artículo 300 del Código Penal portugués, se prevén penas para “*todo aquel que promueva o establezca un grupo, una organización o una asociación terrorista, se adhiera a ella o le preste apoyo ...*”. **Por lo tanto, abarca todas las modalidades de apoyo, activo o pasivo, a grupos u organizaciones terroristas, a saber: el reclutamiento con destino a organizaciones terroristas y la obtención de armas para fines de terrorismo.**

Este régimen se completa con las disposiciones del artículo 301, que tipifica como delito los actos enumerados en el artículo 300 cuando los realiza una sola persona, o a título individual.

Ambos artículos (300 y 301) forman parte del capítulo del Código Penal portugués relativo a los delitos contra el orden y la tranquilidad públicos.

En el párrafo 2 del artículo 300 del Código Penal se define como grupo, organización o asociación terrorista “*todo grupo de dos o más personas que, actuando concertadamente, se proponga poner en peligro la integridad nacional o la independencia nacional, impedir, alterar o subvertir el funcionamiento de las instituciones del Estado previstas en la Constitución, obligar a la autoridad pública a realizar un acto, tolerarlo o abstenerse de realizarlo, o incluso intimidar a ciertas personas, grupos de personas o a la población en general mediante la comisión de delitos:*

- a) *Contra la vida; la integridad física o la libertad de las personas;*
- b) *Contra la seguridad de los transportes y las comunicaciones, incluidas las comunicaciones telegráficas, telefónicas, de radio o de televisión;*
- c) *De provocación deliberada de una situación de peligro general, mediante incendio, dispersión de sustancias radiactivas o gases tóxicos o asfixiantes, inundación o avalancha, derribo de edificios, contaminación de alimentos y agua destinados*

al consumo humano o propagación de enfermedades, plagas o plantas o animales nocivos;

d) De sabotaje;

e) Que impliquen el uso de energía nuclear, armas de fuego, sustancias o artefactos explosivos, medios incendiarios de cualquier tipo, paquetes o cartas bomba.

Las disposiciones del Código Penal mencionadas se inspiran en la Convención Europea para la Represión del Terrorismo, aprobada en Estrasburgo en 1977, que Portugal aprobó para su ratificación en virtud de la Ley 19/81, de 18 de agosto.

Incluso si no existieran normas específicas en la materia como las que figuran en los artículos 300 y 301 del Código Penal, siempre serían aplicables a **actos de reclutamiento con destino a una organización terrorista** las disposiciones del artículo 299 de dicho Código, titulado “Asociación criminal”.

Reiteramos que la Ley de Seguridad Interna, mencionada en el párrafo anterior (artículo 16 3 d) de la Ley 20/87) faculta específicamente a las autoridades policiales para poner fin a la actividad de empresas, grupos, organizaciones o asociaciones que se dediquen a actividades de terrorismo, incluido el **adiestramiento o el reclutamiento de personas con destino a dichas organizaciones, o el suministro o la obtención de armas para tal fin**.

La legislación penal portuguesa también tipifica otros tipos de conducta delictiva generalmente asociada con actividades de terrorismo, como por ejemplo:

- Los delitos de rapto, secuestro y toma de rehenes;
- El delito de captura o secuestro de aeronave, buque u otro medio de transporte público de pasajeros;
- El delito de sabotaje y sabotaje contra la defensa nacional;
- El delito de sabotaje informático;
- Las penas previstas para estos delitos oscilan entre 3 y 15 años de prisión;
- Los llamados “delitos de peligro general”, cuyas penas oscilan también entre 3 y 15 años de prisión.

Con respecto a las *armas* (y aunque este régimen no es exclusivo de los delitos de terrorismo), en el párrafo 1 del artículo 275 del Código Penal, enmendado en virtud de la Ley 98/2001, de 25 de agosto, se prevén penas entre dos y cinco años de prisión por importar, fabricar, obtener mediante transformación, guardar, comprar, vender, ceder o adquirir a cualquier título o por cualquier medio, transportar, distribuir, retener, utilizar o poseer un arma clasificada como material de guerra, arma de fuego prohibida o arma para lanzar sustancias tóxicas, asfixiantes, radiactivas o corrosivas, o artefacto o sustancia explosiva o radiactiva, o sustancia utilizada en la fabricación de gases tóxicos o asfixiantes, en violación de las disposiciones legales o contrariamente a lo establecido por la autoridad competente.

En el párrafo 2 de ese artículo se aumenta a ocho años la pena máxima prevista, en caso de que los actos definidos en el párrafo 1 se refieran a un artefacto o sustancia capaz de producir una explosión nuclear; y

En el párrafo 4 del mismo artículo (redactado a raíz de la adhesión de Portugal a la Convención europea para el control de la adquisición y la posesión de armas de

fuego por particulares) se prevén penas de hasta un año de prisión o multa simplemente por poseer accesorios de armas de fuego prohibidas, como silenciadores, cañones, tambores, municiones y miras telescópicas.

A continuación se enumeran los instrumentos legislativos en que se establecen medidas para impedir el suministro de armas a individuos o entidades que podrían utilizarlas para cometer delitos:

- Decreto Ley 376/84, de 30 de noviembre, que regula minuciosamente, entre otros asuntos, el comercio y el control de explosivos para uso civil;
- Decreto Ley 265/94, de 25 de abril, por el que se transpone al sistema jurídico portugués la Directiva 93/15/CEE del Consejo, que complementa el marco jurídico establecido en el decreto ley anterior, concretamente en lo que atañe a los requisitos mínimos de seguridad en materia de explosivos, su certificación de calidad, su emplazamiento en el mercado europeo y la responsabilidad adecuada en caso de infracciones de cualquiera de sus disposiciones, por las cuales se prevén multas; y
- Decreto Ley 39/93, de 3 de diciembre, por el cual se transpone al sistema jurídico portugués la Directiva 91/477/CEE del Consejo, de 18 de junio, sobre el control de la adquisición y posesión de armas.

Además, Portugal es miembro de varias organizaciones y acuerdos internacionales que tratan de impedir la proliferación de armas y el uso de armas con fines delictivos, como el Grupo de Abastecedores Nucleares, el Régimen de Control de la Tecnología de Misiles, el Grupo de Australia y el Acuerdo de Wassenaar (relativo a artículos de doble uso no incluidos en los grupos anteriores). Portugal también cumple la legislación europea y nacional vigente en la materia (concretamente el Reglamento CEE No. 1334/2000 y el Decreto Ley 436/91, de 8 de noviembre).

En diciembre de 2000 Portugal firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), que actualmente se encuentra en vías de ratificación.

Apartado b)

[El Consejo de Seguridad decide también que todos los Estados ...]

Adopten las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, en particular, advirtiéndolo de ello cuanto antes a otros Estados mediante el intercambio de información.

¿Qué otras medidas se están adoptando para prevenir la comisión de actos de terrorismo y, en particular, qué mecanismos de alerta temprana existen que permitan el intercambio de información con otros Estados?

A partir del 11 de septiembre de 2001, se activaron todos los mecanismos apropiados de alerta temprana del Sistema Nacional de Seguridad Interna y Protección Civil, que abarca todas las fuerzas y los servicios de seguridad, entre ellos los servicios de inteligencia, la policía (especialmente la Policía de Seguridad Pública, el Cuerpo de Intervención y el Grupo de Operaciones Especiales, los servicios de investigación criminal, el Servicio de Extranjeros y Fronteras, las autoridades marítimas y aeronáuticas) y los departamentos de aduanas.

Actualmente, el intercambio de información a nivel internacional se realiza, con mayor intensidad y profundidad, en el marco de los compromisos multilaterales y bilaterales contraídos por Portugal, en el seno de las organizaciones supranacionales e internacionales de las que Portugal es miembro y mediante redes de información establecidas en virtud de los instrumentos internacionales o previstas en ellos, como las redes de la Interpol y la Europol y el Sistema de Información Schengen.

Cabe señalar también la Ley 5/2002, de 11 de enero, antes mencionada, que establece un régimen especial de acopio de pruebas (exención del secreto fiscal y el secreto profesional para las entidades financieras, grabación de voces e imágenes) y la reversión de activos al Estado aplicable a los delitos de tráfico de drogas, **terrorismo**, tráfico de armas, corrupción, blanqueo de dinero, asociación delictiva y otras formas de delincuencia organizada.

Apartado c)

[El Consejo de Seguridad decide también que todos los Estados ...]

Denieguen refugio a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo, o prestan apoyo a esos actos, o proporcionan refugio con esos fines.

¿Qué legislación o qué procedimientos existen para denegar refugio a los terroristas, como leyes para la exclusión o expulsión de los tipos de personas a que se hace referencia en este apartado? Sería útil que los Estados proporcionaran ejemplos de cualquier medida que hubieran adoptado al respecto.

Apartado d)

[El Consejo de Seguridad decide también que todos los Estados ...]

Impidan que quienes financien, planifican, facilitan o cometen actos de terrorismo utilicen su territorio para esos fines, contra otros Estados o sus ciudadanos.

¿Qué legislación o qué procedimientos existen para impedir que los terroristas actúen desde su territorio contra otros Estados o sus ciudadanos? Sería útil que los Estados proporcionaran ejemplos de cualquier medida que hubieran adoptado al respecto.

[Respuesta conjunta]

Véase la respuesta al apartado b) del párrafo 1, especialmente las disposiciones de los artículos 300 y 301 del Código Penal.

Recordaremos, no obstante, que el derecho penal portugués se aplica con arreglo al principio de territorialidad, complementado por los principios de salvaguarda de los intereses nacionales y la nacionalidad.

Así pues, el Código Penal portugués, según lo dispuesto en sus artículos 4 a 7, es aplicable en general a hechos ocurridos en territorio portugués y, a falta de un tratado o convenio internacional que establezca lo contrario, a hechos ocurridos fuera de las fronteras nacionales, cuando se trate, entre otros casos, de los **delitos de terrorismo, de organizaciones terroristas**, delitos contra la seguridad del Estado o contra el estado de derecho.

El Decreto Ley 244/98, de 8 de agosto (enmendado por el Decreto Ley 4/2001, de 10 de enero), establece los requisitos de entrada y permanencia en territorio portugués, así como de salida y expulsión del territorio nacional, y prevé varios procedimientos para ello, tales como la denegación de entrada, la expulsión en cumplimiento de una decisión administrativa o judicial y la expulsión como pena accesoria (artículo 1).

En virtud de ese Decreto Ley, **se denegará la entrada al territorio portugués** a todos los extranjeros que no cumplan los requisitos legales generales para ser admitidos en Portugal y también a aquellos extranjeros que representen un peligro o una amenaza grave al orden público, la seguridad nacional o las relaciones internacionales entre los Estados miembros de la Unión Europea o Estados en cuyo territorio está vigente el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen (artículo 11).

La denegación de la entrada en territorio portugués es competencia del Servicio de Extranjeros y Fronteras, servicio de seguridad encargado de hacer cumplir la política nacional en materia de inmigración y asilo (artículo 18).

También se prohíbe la entrada en territorio portugués a determinados extranjeros que figuran en el Sistema de Información Schengen y en la “Lista nacional de personas no admitidas”, por las razones siguientes (artículo 25):

- Haber sido expulsado del país;
- Haber sido enviado a otro país en el marco de un acuerdo de readmisión;
- Haber sido condenado por lo menos a un año de privación de libertad;
- Existir claros indicios de que esas personas han cometido delitos graves;
- Existir claros indicios de que tienen la intención de cometer delitos graves o de que constituyen una amenaza al orden público, la seguridad nacional o las relaciones internacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, o un Estado en cuyo territorio está vigente el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen;
- Haberse acogido al apoyo del Estado portugués para regresar voluntariamente a su país de origen.

Se consultará al Servicio de Extranjeros y Fronteras antes de la **concesión de visados de residencia**, visados de estadia temporal y algunos permisos de trabajo o cuando así lo determinen razones de interés nacional. Sin embargo, se debe consultar al Servicio de Información de Seguridad antes de conceder cualquier visado, cuando dicha **concesión esté determinada por razones de seguridad nacional o por los mecanismos previstos en el marco de la política de seguridad común europea (artículo 40).**

Por otra parte, la Quinta Enmienda a la Constitución de la República Portuguesa, que entró en vigor después del 11 de septiembre, mantiene la **prohibición absoluta de expulsar a ciudadanos portugueses** del territorio nacional y dispone que los **extranjeros** que entraron o permanecen legalmente en el territorio nacional, obtuvieron un permiso de residencia o presentaron una petición de asilo que no haya sido denegada, sólo podrán **ser expulsados en cumplimiento de una decisión judicial** (párrafos 1) y 2) del artículo 33 de la Constitución de la República Portuguesa).

El Decreto Ley 244/98 (enmendado por el artículo 99 del Decreto Ley 4/2001, de 10 de enero) establece los siguientes requisitos para **expulsar** a ciudadanos extranjeros en cumplimiento de una decisión administrativa (sin perjuicio de cualquier tratado o convenio internacional en que Portugal sea parte):

- a) Que hayan entrado o permanezcan irregularmente en territorio portugués;
- b) Que hayan atentado contra la seguridad nacional, el orden público o la moralidad pública;
- c) Que su presencia o actividades en el país constituyan una amenaza a los intereses o a la dignidad del Estado portugués o sus nacionales;
- d) Que hayan interferido de una manera abusiva en el ejercicio de los derechos de participación política reservados a los nacionales de Portugal;
- e) Que hayan cometido actos que, de ser conocidos por las autoridades portuguesas, hubieran impedido su admisión al país.

El mismo Decreto Ley dispone que, como regla general, se puede imponer la **pena accesoria de expulsión** a:

- a) Ciudadanos extranjeros residentes en el país que hayan sido condenados a más de un año de prisión por un delito doloso; sin embargo, al aplicar esta medida, se debe prestar atención a la gravedad de los hechos cometidos por el acusado, el riesgo de reincidencia, el grado de integración en la vida social, los intereses de la prevención y el período de residencia en Portugal;
- b) Ciudadanos extranjeros que residen permanentemente en Portugal, cuando su conducta constituya una amenaza suficientemente grave al orden público o a la seguridad nacional.

No obstante, no se impondrá esta pena accesoria a extranjeros residentes cuando:

- a) Hayan nacido en Portugal y tengan allí su residencia habitual;
- b) Tengan hijos menores de edad residentes en territorio portugués respecto de los cuales tuvieran la patria potestad en el momento de cometerse los hechos, y se encarguen de su sustento y educación, en caso de que los hijos no lleguen a cumplir 18 años de edad en el tiempo previsto de cumplimiento de la pena;
- c) Hayan permanecido en Portugal desde los 10 años de edad y tengan si residencia habitual en territorio portugués.

Con respecto al marco jurídico relativo a la **extradición**², la Constitución de la República Portuguesa establece en su Quinta Enmienda un régimen excepcional por

² Portugal ha ratificado el **Convenio Europeo sobre Extradición** y sus **protocolos adicionales**. Estos tres instrumentos fueron aprobados para su ratificación en virtud de la resolución 23/89 del Parlamento, de 21 de agosto. Portugal también es parte del **Convenio Europeo sobre Asistencia Mutua en Materia Penal**, aprobado para su ratificación en virtud de la resolución 39/94 del Parlamento, de 14 de julio, y su primer **Protocolo Adicional**, aprobado para su ratificación en virtud de la resolución 49/94 del Parlamento, de 12 de agosto. En virtud del Decreto Presidencial 41/97, de 18 de junio, se ratificó el **Convenio relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea**, firmado en Bruselas el 3 de octubre de 1995 y aprobado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, en virtud de este instrumento internacional se derogan las normas previstas en el artículo 18.1 del convenio europeo sobre extradición.

el cual “*La extradición de ciudadanos portugueses del territorio nacional sólo se admite en condiciones de reciprocidad establecidos por convenio internacional, en los casos de terrorismo y criminalidad internacional organizada, y siempre que la orden judicial del Estado requirente ofrezca garantías de un proceso justo y equitativo*” (párrafo 3 del artículo 33 de la Constitución de la República Portuguesa).

En líneas generales, en el marco jurídico portugués sólo se admite la extradición por delitos a los que corresponda, según el Derecho del Estado requirente, pena o medida de seguridad privativa o restrictiva de la libertad con carácter perpetuo o de duración indefinida, en condiciones de reciprocidad establecidas por convenio internacional y siempre que el Estado requirente ofrezca garantías de que dicha pena o medida de seguridad no será aplicada o ejecutada (párrafo 4 del artículo 33 de la Constitución de la República Portuguesa).

Por otra parte, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 33, lo dispuesto en los párrafos anteriores de dicho artículo (enunciados *supra*) “*no va en perjuicio de las normas de cooperación judicial penal establecidas en el ámbito de la Unión Europea*”. Con ello se admite la posibilidad de aplicar nuevos mecanismos que se encuentran actualmente en fase de elaboración en la Unión Europea, como la orden de detención europea y mecanismos ulteriores de entrega de personas detenidas.

Finalmente, en el párrafo 6 del artículo 33 de la Constitución de la República Portuguesa se mantiene la prohibición de extraditar o entregar a personas a cualquier título, por motivos políticos o por delitos a los que corresponda, según el derecho del Estado requirente, pena de muerte u otra de que se derive una lesión irreversible de la integridad física.

Cabe subrayar también que el sistema jurídico portugués se rige por el principio de *extraditar o procesar*, previsto en el artículo 5 del Código Penal, que dispone lo siguiente:

“1. [...] El Código Penal portugués también es aplicable a hechos cometidos fuera del territorio nacional [...].

e) Por extranjeros que hayan sido encontrados en Portugal y cuya extradición haya sido solicitada, cuando el delito cometido admita la extradición y ésta no se pueda conceder.

2. El Código Penal portugués también es aplicable a hechos cometidos fuera del territorio nacional que el Estado portugués se vea obligado a juzgar en virtud de un tratado o convenio internacional.”

Finalmente, no debemos olvidar la Ley 15/98, de 26 de marzo, que establece el **marco jurídico en materia de asilo y refugiados**:

El artículo 3 de dicha ley establece las condiciones de exclusión de asilo y dispone que se denegará asilo a las siguientes personas:

- Aquellos que hayan cometido actos contrarios a los intereses fundamentales o a la soberanía de Portugal;
- Aquellos que hayan cometido crímenes contra la paz, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, tal como se definen en los instrumentos internacionales destinados a prevenirlos;

- Aquellos que hayan cometido delitos dolosos de derecho común punibles con pena de prisión superior a tres años;
- Aquellos que hayan cometido actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Una vez concedida la condición de refugiado o exiliado (artículos 2 y 33), está prohibido al beneficiario (artículo 7):

- Interferir, de forma prohibida por la Ley, en la vida política portuguesa;
- Realizar actividades que pudieran comprometer o perjudicar la seguridad interna o externa, el orden público o las relaciones de Portugal con otros Estados;
- Cometer actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas o a cualquier tratado o convenio en que Portugal sea parte o al que se haya adherido.

Constituyen motivo de pérdida del derecho de asilo y, por lo tanto, de la condición de refugiado, entre otros, los siguientes casos (artículo 36):

- La realización de actos o actividades mencionados en el artículo 7 (enunciado *supra*), en cuyo caso la pérdida del derecho de asilo será también motivo de expulsión del territorio portugués;
- La demostración de falsedad en los argumentos en que se basa la petición de asilo o la existencia de hechos que, de haberse conocido en el momento de la concesión, habrían llevado a la denegación del asilo;
- La decisión de expulsar al refugiado dictada por un tribunal competente.

La ejecución de una orden judicial de expulsión es competencia del Servicio de Extranjeros y Fronteras, que debe informar de la misma al delegado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y al Consejo Portugués para los Refugiados (artículo 48).

Apartado e)

[El Consejo de Seguridad decide también que todos los Estados ...]

Velen por el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos actos, y por que, además de cualesquiera otras medidas que se adopten contra esos actos, éstos queden tipificados como delitos graves en las leyes y otros instrumentos legislativos internos, y por que el castigo que se imponga corresponda a la gravedad de esos actos.

¿Qué medidas se han adoptado para tipificar los actos de terrorismo como delitos graves y para velar por que su castigo corresponda a la gravedad de esos actos? Sírvanse aportar ejemplos de las sentencias condenatorias dictadas y las penas impuestas.

Véanse las respuestas a los apartados b) y d) del párrafo 1.

Apartado f)

[El Consejo de Seguridad decide también que todos los Estados ...]

Se proporcionen recíprocamente el máximo nivel de asistencia en lo que se refiere a las investigaciones o los procedimientos penales relacionados con la financiación de los actos de terrorismo o el apoyo prestado a éstos, en particular para la obtención de las pruebas que posean y que sean necesarias en esos procedimientos.

¿Qué procedimientos y mecanismos existen para proporcionar asistencia a otros Estados? Sírvase facilitar los detalles disponibles acerca de cómo se han empleado en la práctica.

Véanse otras respuestas, especialmente las respuestas al apartado a) de los párrafos 1 y 3.

Inciso g)

[El Consejo de Seguridad decide también que todos los Estados ...]

Impidan la circulación de terroristas o de grupos terroristas imponiendo controles eficaces de fronteras y controles en la expedición de documentos de identidad y de viaje, y adoptando medidas para evitar la falsificación, la alteración ilegal y la utilización fraudulenta de documentos de identidad y de viaje.

¿De qué forma impiden la circulación de terroristas los controles fronterizos en su país? ¿De qué forma apoyan esa tarea sus procedimientos para la expedición de documentos de identidad y de viaje? ¿Qué medidas existen para evitar su falsificación, etc.?

El sistema portugués de verificación y control de pasaportes se ajusta a las recientes recomendaciones internacionales sobre la seguridad de los documentos de identidad y de viaje, concretamente las recomendaciones formuladas por la Unión Europea y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Portugal también aplica directamente a su ordenamiento interno el Reglamento (CE) 683/95 del Consejo, que establece un formato uniforme para los visados expedidos por los Estados miembros de la Unión Europea y los países candidatos, y prevé procedimientos y especificaciones técnicas con miras a prevenir la producción y el uso de visados falsos o falsificados.

Asimismo, el Servicio de Extranjeros y Fronteras ha prestado particular atención a las nuevas tarjetas de identidad y los nuevos pasaportes portugueses.

Cabe señalar también que los puestos fronterizos portugueses están equipados con los últimos adelantos en materia de detección de documentos falsificados.

En virtud de una resolución del Consejo de la Unión Europea aprobada el 27 de mayo de 1999 se creó un sistema de alerta temprana para la transmisión de información sobre inmigración ilegal y redes ilegales de inmigración. Este sistema se ha utilizado frecuentemente desde el 11 de septiembre de 2001.

Párrafo 3

Apartado a)

[El Consejo de Seguridad exhorta a todos los Estados a ...]

Encontrar medios para intensificar y agilizar el intercambio de información operacional, especialmente en relación con las actividades o los movimientos de terroristas o redes de terroristas; documentos de viaje alterados ilegalmente o falsificados; el tráfico de armas, explosivos o materiales peligrosos; la utilización de la tecnología de las comunicaciones por grupos terroristas; y la amenaza que representa la posesión de armas de destrucción en masa por grupos terroristas.

¿Qué medidas se han adoptado para intensificar y agilizar el intercambio de información operacional en las esferas indicadas en este apartado?

A raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre, las fuerzas y los servicios de seguridad, especialmente los servicios de inteligencia de seguridad, han tomado una mayor conciencia de la necesidad de intensificar el intercambio de información e inteligencia entre los diversos órganos nacionales e internacionales competentes en la lucha contra el terrorismo.

Mientras tanto, ha aumentado el intercambio de información operacional con los servicios de seguridad de los Estados Unidos de América.

Desde el 11 de septiembre se presenta semanalmente al Comité Ejecutivo de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) una evaluación de la amenaza a la seguridad interna.

Los servicios nacionales de seguridad también han participado en varias reuniones para intercambiar información operacional con órganos similares de otros países, en el marco de los protocolos de cooperación bilateral establecidos previamente y estructuras especiales de reciente creación. Cabe mencionar, por ejemplo, las reuniones periódicas de los jefes de las dependencias europeas de lucha contra el terrorismo.

En este sentido, cabe señalar la existencia de un contacto permanente (24 horas al día) entre los funcionarios de enlace de los diversos servicios de inteligencia de seguridad, así como la organización de operaciones conjuntas y la armonización de medidas contra el terrorismo por los Estados miembros de la Unión Europea, concretamente en lo que se refiere a la elaboración de listas de terroristas o grupos terroristas y la actualización de información al respecto.

Inciso b)

[El Consejo de Seguridad exhorta a todos los Estados a ...]

Intercambiar información de conformidad con el derecho internacional y la legislación interna y cooperar en las esferas administrativa y judicial para impedir la comisión de actos de terrorismo.

¿Qué medidas se han adoptado para intercambiar información y cooperar en las esferas indicadas en este apartado?

Véase la respuesta al apartado a) del párrafo 1.

A nivel nacional, el aumento del intercambio de información operacional se debe a los esfuerzos del Gabinete de Coordinación de la Seguridad³. Ha aumentado la cooperación entre las fuerzas y los servicios de seguridad con el establecimiento de una Secretaría Permanente.

Dicho Gabinete prepara documentos semanales en los que se evalúa la amenaza que representa el terrorismo para la seguridad interna. En este sentido, se ha prestado especial atención a la participación de otras entidades nacionales, concretamente la dirección de aeronáutica y las compañías aéreas.

Cabe subrayar el especial empeño demostrado por todos los órganos del Sistema Nacional de Seguridad Interna en mejorar la coordinación y gestión de recursos en materia de investigación y **prevención de actos de terrorismo**, que condujo a la detección de situaciones sospechosas y la transmisión de información de interés operacional a terceros.

Por otra parte, se está dando prioridad a la cooperación con los países de origen y tránsito de corrientes migratorias, entre otras cosas, en materia de datos técnicos e intercambio de información.

En la Unión Europea y algunas de sus instituciones, como el Centro de información, reflexión e intercambio en materia de cruce de fronteras e inmigración (CIREFI) y la Europol, se ha promovido la lucha contra la migración ilegal y sus redes de apoyo, así como el uso de documentación fraudulenta, mediante el intercambio oportuno de información entre los Estados miembros, Noruega, Islandia y los países candidatos, además del sistema de alerta temprana y otras iniciativas de los funcionarios de enlace en materia de inmigración.

En el ámbito de la asistencia jurídica internacional cabe mencionar, entre otras cosas, la cooperación con la Interpol (Ley 144/99, de 31 de agosto, enmendada por la Ley 104/2001, de 31 de agosto; Decreto Ley 275-A/2000, de 9 de noviembre enmendado por la Ley 103/2001, de 25 de agosto).

En materia de **asilo** los Estados miembros de la Unión Europea, por medio del Centro de información, reflexión e intercambio en materia de asilo (CIREA), analizan la situación en los países de origen de las personas que solicitan asilo y comparten información sobre sus prácticas y su legislación interna en materia de asilo.

A raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, los países miembros de la Unión Europea facilitan mensualmente a la Comisión Europea datos estadísticos sobre el número y las principales características de las peticiones de asilo presentadas por los nacionales del Afganistán.

Apartado d)

[El Consejo de Seguridad exhorta a todos los Estados a ...]

Adherirse cuanto antes a las convenciones y los protocolos internacionales pertinentes relativos al terrorismo, en particular al Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, de 9 de diciembre de 1999.

³ El Gabinete de Coordinación de la Seguridad es un órgano consultivo especializado cuya función es coordinar, a nivel técnico y operacional, la actividad de las fuerzas y los servicios de seguridad. Está integrado por los jefes de los diversos cuerpos que componen las fuerzas y los servicios de seguridad.

¿Cuál es la intención de su Gobierno acerca de la firma y ratificación de los convenios y protocolos a que se hace referencia en este apartado?

Portugal ha firmado y ratificado 10 de los 12 convenios de las Naciones Unidas sobre terrorismo designados. A nivel nacional, están actualmente en marcha el proceso de ratificación del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (Nueva York, 9 de diciembre de 1999) y el proceso de adhesión al Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección (Montreal, 11 de marzo de 1991).

Apartado c)

[El Consejo de Seguridad exhorta a todos los Estados a ...]

Cooperar, en particular mediante acuerdos y convenciones bilaterales y multilaterales, para prevenir y reprimir los ataques terroristas, y adoptar medidas contra quienes cometan actos de esa índole.

¿Qué medidas se han adoptado para cooperar en las esferas indicadas en este apartado?

Apartado e)

Fomentar la cooperación y aplicar plenamente las convenciones y los protocolos internacionales pertinentes relativos al terrorismo, así como las resoluciones del Consejo de Seguridad 1269 (1999) y 1368 (2001).

Facilite cualquier información pertinente sobre la aplicación de los convenios, protocolos y resoluciones a que se hace referencia en este apartado.

[Respuesta conjunta]

En el marco de sus relaciones con terceros países, tanto a nivel multilateral como bilateral, Portugal ha actuado sistemáticamente para que se tome conciencia de la necesidad de intensificar la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo.

En el marco de las relaciones bilaterales, se incluyó esta cuestión en el programa a varios niveles. A nivel regional, cabe mencionar en este sentido una iniciativa impulsada por Portugal en la Cumbre Extraordinaria sobre el Terrorismo de los Ministros de Relaciones Exteriores del Foro Mediterráneo, celebrada en Agadir los días 24 y 25 de octubre de 2001.

En todos esos contactos se resaltó la importancia de que los Estados firmaran, ratificaran y aplicaran eficazmente los convenios internacionales en la materia. También se subrayó la importancia de una convención mundial sobre el terrorismo y del valor añadido que representaría en el derecho internacional.

Portugal también ha sabido aprovechar su especial relación con los países de lengua portuguesa para lanzar un llamamiento similar, concretamente en el marco institucional de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, cuya declaración de 31 de octubre de 2001 sobre la lucha contra el terrorismo internacional demuestra el alcance de dicho compromiso.

En cuanto a los países africanos de lengua portuguesa en particular, Portugal expresó su disposición a prestarles asistencia en la elaboración de legislación nacional

para aplicar el derecho internacional en materia de terrorismo, mediante el intercambio de información, la cooperación entre ministerios u otros medios que se convendrían oportunamente.

A tal fin, Portugal ha puesto a disposición de los interesados versiones de los convenios de las Naciones Unidas sobre el terrorismo en portugués y ha fomentado actividades de cooperación en los ámbitos pertinentes de la buena gestión de los asuntos públicos, la justicia y los asuntos internos por su importancia para la lucha común.

Algunos de esos países se basan en la experiencia portuguesa a la hora de elaborar los informes que han de presentar a los órganos de las Naciones Unidas y preparar sus administraciones para la adopción de medidas con miras a combatir el terrorismo internacional.

En el marco de las relaciones de la Unión Europea con terceros países, Portugal desempeñó un papel activo en los ejercicios diplomáticos concertados por la Unión Europea, manteniendo durante su presidencia un diálogo frecuente con esos países sobre enfoques relativos a los convenios y evaluando su grado de compromiso en la lucha contra el terrorismo internacional.

Apartado f)

[El Consejo de Seguridad exhorta a todos los Estados a ...]

Adoptar las medidas apropiadas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la legislación nacional y el derecho internacional, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, antes de conceder estatuto de refugiado, con el propósito de asegurarse de que los solicitantes de asilo no hayan planificado ni facilitado actos de terrorismo, ni participado en su comisión.

¿Qué legislación, procedimientos y mecanismos existen para asegurarse, antes de conceder el estatuto de refugiado, de que los solicitantes de asilo no hayan participado en actividades terroristas? Sírvase aportar ejemplos de cualquier caso de interés.

Apartado g)

[El Consejo de Seguridad exhorta a todos los Estados a ...]

Velar, de conformidad con el derecho internacional, por que el estatuto de refugiado no sea utilizado de modo ilegítimo por autores, organizadores o patrocinadores de actos de terrorismo, y por que no se reconozca la reivindicación de motivaciones políticas como causa para denegar las solicitudes de extradición de presuntos terroristas.

¿Qué procedimientos existen para evitar que los terroristas abusen del estatuto de refugiado? Sírvase facilitar detalles de los procedimientos legislativos o administrativos que impiden que se reconozca la reivindicación de motivaciones políticas como causa de denegación de las solicitudes de extradición de presuntos terroristas. Sírvase presentar ejemplos de cualquier caso de interés.

[Respuesta conjunta]

Véanse las respuestas a los apartados c) y d) del párrafo 2.

Abundando en lo anterior, reiteramos que, de conformidad con el marco jurídico portugués en materia de asilo y refugiados (la Ley 15/98, de 26 de marzo, antes mencionada), se deniega asilo a todos aquellos que hayan cometido crímenes contra la paz, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, tal como se definen en los instrumentos internacionales destinados a prevenir tales crímenes; a aquellos que hayan cometido delitos dolosos de derecho común punibles con pena de prisión superior a tres años; y a aquellos que hayan cometido actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas (artículo 3). Por lo tanto, **se deniega inmediatamente el derecho de asilo a las personas involucradas en actividades de terrorismo.**

El propósito de esta disposición legal es precisamente prevenir el abuso de la condición de refugiado, especialmente por terroristas.

Para garantizar su amplitud y eficacia, el artículo 36 de la misma ley establece las causas de pérdida del derecho de asilo, y por ende de la condición de refugiado, que son, entre otras, las siguientes: realizar actividades que pudieran comprometer o perjudicar la seguridad interna o externa, el orden público o las relaciones de Portugal con otros Estados; realizar actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas o de cualquier tratado o convenio en que Portugal sea parte o al que se haya adherido (artículo 7); demostración de falsedad en los argumentos en que se basa la petición de asilo o la existencia de hechos que, de haberse conocido en el momento de la confesión, hubieran significado la denegación de asilo.

Una vez más, serán privadas del derecho de asilo y la condición de refugiados las personas que estén o hayan estado involucradas en actividades terroristas.

Recordaremos que la pérdida de la condición de refugiado conduce a la expulsión del refugiado del territorio portugués en cumplimiento de una orden expedida por un tribunal competente (artículo 87) y ejecutada por el Servicio de Extranjeros y Fronteras, que debe dar conocimiento de la misma al delegado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y al Consejo Portugués para los Refugiados (artículo 48).

Por otra parte, la aplicación rigurosa de la normativa portuguesa en materia de inmigración y asilo es competencia del Servicio de Extranjeros y Fronteras, órgano que está facultado para tramitar procedimientos de asilo y, simultáneamente, denegar la entrada al territorio nacional a todo extranjero que represente un peligro o una amenaza grave al orden público, la seguridad nacional o las relaciones internacionales entre los Estados miembros de la Unión Europea o los Estados en cuyos territorios esté vigente el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen. Gracias a este sistema se combate con mayor eficacia la entrada de terroristas en el territorio portugués, concretamente cuando tratan de acogerse a la condición de refugiado.

En el ejercicio de sus competencias en materia de asilo, el Servicio de Extranjeros y Fronteras puede solicitar el asesoramiento de expertos. Sus decisiones se basan en propuestas razonadas elaboradas por el Comisariado Nacional para los Refugiados, un órgano del Ministerio de Administración Interna integrado por abogados y magistrados judiciales o del Ministerio Público con más de 10 años de servicio y clasificación de mérito (artículos 34 y 35).